



Alejandro Tiana y Roberto Fernández, vicepresidente y presidente de la conferencia de rectores. / M. TORRES

La Universidad busca soluciones a la lacra de sus “profesores pobres”

C. VÁZQUEZ / P. ÁLVAREZ, Valencia / Madrid
 Son profesores universitarios e imparten lecciones por las que pueden ganar menos de 500 euros al mes. Los asociados son los más precarios de la Universidad y se cuentan por miles. El presidente de los rectores, Roberto Fernández, habló hace

meses de “profesores pobres” y lo denunció ante el ministerio. Ayer, en el primer encuentro de la conferencia de rectores pidió soluciones a los problemas de financiación y a la precariedad creciente de las plantillas. La reunión se celebró en Valencia, donde los asociados se han puesto en huelga.

La figura del profesor asociado nació con un objetivo que no siempre cumple. En la Ley de Reforma Universitaria (1983) se estableció para contratar “temporalmente” a especialistas del mundo profesional que pudieran aportar su experiencia a las aulas. Más de 30 años después, distintas fuentes universitarias coinciden en que aquella idea inicial se ha pervertido con los años y se ha agudizado durante la crisis por la prohibición de reponer plantilla que aprobó el Ministerio de Educación.

Ya no son siempre especialistas

que dan un servicio temporal, sino profesores en precario que encadenan contratos semestrales o anuales durante largos periodos de tiempo y que hacen funciones similares a funcionarios o contratados más estables. Pero cobrando sueldos de 200 a 600 euros y teniendo que pagar además la cuota de autónomos.

“Llevo más de 20 años encadenando contratos”, explica la profesora asociada Isabel de la Cruz, docente en el departamento de Sociología de la Universidad de Valencia (UV). “Si consideramos que no nos pa-

gan el tiempo que dedicamos a preparar las clases o las tutorías, cada hora de nuestro trabajo sale a cinco euros”, denuncia. “Somos manos de obra barata y precarizada, por eso pedimos que a igual trabajo haya igual salario”. De la Cruz forma parte de la plataforma de profesores asociados de la UV, la universidad donde se han iniciado las protestas.

La situación es extensible a otros campus. El nuevo presidente de la conferencia de rectores, Roberto Fernández, aseguró el pasado noviembre que en

Un pacto para la educación superior

Los grupos parlamentarios negocian estas semanas los detalles de un pacto de Estado por la educación que, de alcanzarse, sería inédito en España pero que se acotó y dejó fuera la etapa universitaria.

El presidente de los rectores españoles, Roberto Fernández, reclamó ayer que se active también la negociación para un acuerdo “que pudiera sustanciarse en una nueva ley de universidades o en la reforma profunda de la actual”. La conferencia de rectores, la CRUE, aprobó ayer un documento que han llamado *Agenda Política Universitaria*, con 10 puntos a abordar que se ocupa “de los grandes problemas estructurales, principales y más urgentes de la universidad española”, añadió su presidente.

Los rectores quieren trasladar esa agenda al Gobierno central, a las comunidades autónomas y a los grupos parlamentarios del Congreso. Quieren hablar con los diferentes agentes sociales “para solicitar al Parlamento y al Gobierno que se ponga a las universidades españolas en primera línea”. También prevén reuniones con los consejos sociales y los sindicatos.

la Universidad española “hay profesores pobres”. Lo dijo a los pocos días de asumir el cargo y ha convertido esta precariedad en uno de los ejes prioritarios de su mandato.

El también rector de la Universidad de Lleida se reunió el jueves con los representantes de la plataforma de profesores asociados de la UV en huelga y se comprometió a “poner muy encima de la mesa” la problemática en la conferencia de rectores. Fernández subrayó además la “fuerte repercusión” de esta precariedad en la vida universi-

taria española y llamó a revisarlo con “una visión de conjunto de la carrera docente y de su estructura”. “La Universidad sabe que no puede funcionar si no tiene una cantidad adecuada de profesores permanentes”, argumentó tras acusar a “los recortes que hizo en su momento el Gobierno en las universidades” de la precarización de las plantillas. Situaciones como la de los profesores asociados “no son sostenibles”.

“Es un problema de carácter económico y la solución será también de carácter económico. Una democracia de calidad no puede tener una universidad precarizada”, insistió ayer el presidente de los rectores. Fernández avanza que, tras los recortes de la crisis, los asociados están en una situación “realmente de urgencia”.

Por miles

Las universidades españolas desconocen cuántos docentes están en esta situación. La plataforma de la UV calcula que en su campus son el 30%, unas 1.300 personas. Y que están recibiendo llamadas de otras universidades para organizar nuevas movilizaciones.

Según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Educación, correspondientes al curso 2014-2015, 20.000 de los 99.000 profesores de las universidades públicas son asociados, es decir, un 20% del total. Lo que no ofrece la estadística oficial es cuántos de ellos se corresponden con la mala utilización de esa figura. “Sin duda se cuentan por miles”, estima Martí Parellada, el coordinador general de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), que elabora monográficos periódicos sobre la Universidad española.

Este experto en estadística universitaria subraya que la política del profesorado durante la crisis —el Gobierno prohibió reponer un solo profesor jubilado durante más de un lustro— ha sido “claramente negativa para las plantillas”. “Es evidente que hay un gran problema porque no han aparecido nuevas plazas en cinco o seis años y las necesidades se han cubierto con profesores temporales”, subraya Parellada.